07 de mayo de 2020.-Tras la publicación en el BOE, en el día de hoy, del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. Los economistas solicitan que se atrase la entrada en vigor del texto refundido de la Ley Concursal

Los economistas advierten de que el texto refundido de la Ley Concursal puede generar confusión en un momento como el actual y generar problemas con los escritos y formularios que hay que presentar en los procedimientos de insolvencia. Pese a que el Registro de Economistas Forenses (REFOR) ya había advertido de este problema y había solicitado posponer su publicación, el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes este Real Decreto Legislativo que ha sido publicado hoy. Los economistas solicitan que su entrada en vigor sea el 1 de enero de 2021 –y no el 1 de septiembre de 2020–, en coincidencia con la fecha hasta la que se ha aplazado la obligación de que las empresas insolventes puedan declararse en concurso y al objeto de que los operadores puedan adaptarse a los numerosos cambios introducidos. No obstante, consideran que la fecha del 1 de septiembre podría mantenerse en el caso de los acuerdos de refinanciación, al objeto de agilizarlos con motivo de la crisis generada por el COVID-19.

Así mismo, consideran que el texto refundido de la LC relega aspectos muy importantes –como las condiciones para ser administrador concursal– al albur de un futuro desarrollo reglamentario, lo que introduce una gran inseguridad jurídica y en el mercado por la imposibilidad de comprobación de la experiencia de los candidatos, por lo que sería necesario que los profesionales actualmente habilitados vuelvan a ser incluidos en la próxima reforma legislativa –como, por ejemplo, en la transposición de la Directiva de Insolvencia–.

Madrid, 7 de mayo de 2020.- Los economistas del **Registro de Economistas Forenses (REFOR)** –órgano especializado en materia concursal y pericial del **Consejo General de Economistas de España**– han realizado una valoración de urgencia del *Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal*. A este respecto, los economistas consideran que continúan vigentes algunos artículos importantes de la Ley Concursal (entre ellas, las condiciones subjetivas para el nombramiento de administradores concursales (AC), la retribución de los AC, el registro público concursal y la cuenta de garantía arancelaria), al haber **muchas cuestiones que este nuevo texto refundido ha dejado relegadas a un posterior desarrollo reglamentario**.

Según el presidente del Consejo General de Economistas, **Valentín Pich**, “el texto refundido de la Ley Concursal mejora algo la interpretación de la Ley Concursal, pero que no incluye, reformas profundas de calado, que son las necesarias”. Por ello, expertos forenses del Consejo General de Economistas propusieron en su momento que los cambios en la Ley Concursal fueran más allá de un texto refundido, para adecuarla a la nueva Directiva de Insolvencia (publicada en junio de 2019), con objeto de ayudar a dinamizar las soluciones concursales de reestructuración y segunda oportunidad, aún de escasa utilización en nuestro país, e impulsar los mecanismos de alerta temprana de la insolvencia. En este sentido, **Pich** ha manifestado que “dadas las circunstancias actuales, sería favorable una regulación adicional que impulse la segunda oportunidad, pues los afectados más vulnerables son las personas físicas en situación desfavorecida, los autónomos y los pequeños emprendedores”. No obstante, el **presidente de los economistas** ha señalado que “cada minuto que pase, la ciudadanía se irá dando cada vez más cuenta de la magnitud del problema económico y social generado por el COVID; y este nuevo Real Decreto Legislativo será bienvenido siempre y cuando se demuestre que puede ayudarnos a hacer un replanteamiento en profundidad de las normas concursales y preconcursales al objeto de lograr la supervivencia de las empresas con problemas de tesorería por culpa del coronavirus, pero viables”

Por su parte, el presidente del REFOR, **Alfred Albiol**, ha señalado que “en el texto refundido de la Ley Concursal, se mantiene los 4 meses de blindaje de los acuerdos de refinanciación, pero falta por incluir la posibilidad de ampliación hasta 12 meses que permite la Directiva de Insolvencia”.

Si bien desde el REFOR consideran que el nuevo RD Legislativo podría servir de hoja de ruta para acometer futuras reformas normativas, también entienden el *Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal*, contiene una serie de **problemas** que habrán de ser resueltos en próximas regulaciones, entre los que se encuentran los siguientes:

- No tiene sentido una aplicación homogénea de la Ley Concursal, tanto para grandes como pequeñas empresas. Así, debería haber un capítulo específico para pymes en la ley concursal.
- La cuenta de garantía arancelaria debería ser eficiente, realista y contar con la suficiente capacidad (dado que se van a plantear muchos concursos con pasivos reducidos va a resultar difícil implantar el modelo de cuenta de garantía arancelaria).
- Deberían incluirse medidas que contribuyan a fomentar las operaciones de venta de unidades productivas (el legislador debería tratar de suprimir la inclusión de deudas de la Seguridad Social o al menos flexibilizar su aplicación para pymes).
- Debe incluirse una referencia al sistema LexNET de comunicación electrónica para que sea obligatorio y de urgente aplicación (eficiente aplicación de LexNET sin problemas de compatibilidad de sistemas en todo el territorio nacional).
- Instaurar un sistema ágil y único de notificación a todas las partes en el procedimiento concursal.
- La definición de insolvencia inminente es muy genérica. Sería de consideración que se estableciera algún tipo de plazo o justificación concreta. Por ejemplo, que “el deudor prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones adquiridas para los próximos dos años. Deberá manifestar los motivos por los cuales prevé ese futuro incumplimiento”. Si no se especifica, cualquier deudor podría presentar concurso mañana.
- Dado que gran parte de las empresas llegan tarde al concurso debería tenerse en cuenta una definición de insolvencia más de tipo económico-contable y con criterios objetivos no susceptibles de interpretación.
- El procedimiento concursal debe regularse en atención al tejido empresarial al que va destinado.
- Racionalizar el sistema de designación de los administradores concursales mediante un sistema mixto, basado en la flexibilidad. Para los concursos de pequeño tamaño, se podría aplicar la designación aleatoria, pero habría una elección discrecional a partir de un tamaño mediano y grande de empresas en concurso, según impera en la inmensa mayoría de sistemas concursales a nivel internacional.
- Exoneración definitiva, no provisional. La provisionalidad solo genera inseguridad jurídica. Si se tramita la exoneración del pasivo dando audiencia a todos los acreedores y se cumplen los requisitos para exonerar, carece de sentido tener que esperar 5 años para que la exoneración merezca el carácter de definitiva.
- Sería necesaria una dotación presupuestaria si se quisiera crear un nuevo sistema de organización de la administración concursal.